

N/REF: 0028/2024

I

La consulta plantea el análisis del Real Decreto de referencia, que, de conformidad con su articulado, tiene por objeto el establecimiento de un nuevo sistema de límites de depósito para las personas participantes en actividades de juego *online* de ámbito estatal, aplicable para el conjunto de operadores con los que la persona participante tenga abierto un registro de usuario y compatible con el actualmente existente. Asimismo, el proyecto que se analiza plantea otras modificaciones dirigidas a actualizar determinados contenidos, relativos al importe de las garantías vinculadas a las licencias y a la forma de constitución de estas.

Por otra parte, en relación con las personas jurídicas con forma de sociedad anónima o forma societaria análoga del Espacio Económico Europeo, que no tengan domicilio social en España, el borrador que se informa establece la obligatoria designación de un representante legal permanente con capacidad para recibir notificaciones a todos los efectos, y, en fin, **se establece el desarrollo del régimen jurídico del tratamiento de los datos de carácter personal de las personas afectadas.**

El proyecto consta de un preámbulo, dos artículos modificativos, una disposición adicional única, una disposición transitoria única y dos disposiciones finales.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos -**RGPD**-), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -**LOPDGDD**- conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Según se expone en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo

-MAIN- que se acompaña al escrito de consulta, *se pretende el desarrollo* de una manera sistemática y coherente de las previsiones de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego –“Ley del Juego”-, que conectan directamente con la protección de los consumidores y, en particular, con aquellos colectivos vulnerables o grupos en riesgo, partiendo del hecho de que esta actividad es un fenómeno complejo donde se combinan acciones preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos, estableciéndose determinadas obligaciones para los operadores.

En este sentido, *prima facie*, deben traerse a colación diversas previsiones del articulado de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, entre las que destacan sus artículos 8, “*La protección de los consumidores y políticas de juego responsable*”, 21 -apartado 9-, “*Función de aseguramiento de los intereses de los participantes y los grupos vulnerables sean protegidos*”, y 24, referido a “*Inspección y Control*”, a saber:

“Artículo 8. La protección de los consumidores y políticas de juego responsable.

1. Las políticas de juego responsable suponen que el ejercicio de las actividades de juego se abordará desde una política integral de responsabilidad social corporativa que contemple el juego como un fenómeno complejo donde se han de combinar acciones preventivas, de sensibilización, intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos.

Las acciones preventivas se dirigirán a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego (...)

Los operadores de juego deberán elaborar un plan de medidas en relación con la mitigación de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir el juego sobre las personas e incorporarán las reglas básicas de política del juego responsable. Por lo que se refiere a la protección de los consumidores:

a) Prestar la debida atención a los grupos en riesgo.

b) Proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, promocionando actitudes de juego moderado, no compulsivo y responsable.

(...)

3. El Gobierno pondrá en marcha un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego e instará a las distintas autoridades autonómicas responsables de los correspondientes registros de interdicción de acceso al juego (...).

Por su parte, entre las funciones de la autoridad de regulación del juego, los apartados 9) y 16) del artículo 21 de la “Ley del Juego”, relacionan las dirigidas a:

“9) Asegurar que los intereses de los participantes y los grupos vulnerables sean protegidos...”

(...)

16) Proteger a los grupos de jugadores en riesgo evaluando la eficacia de las medidas sobre juego responsable o más seguro dirigidas a estos colectivos que, en cumplimiento de las obligaciones regulatorias que sean de aplicación, deban desarrollar los operadores de juego.”

Asimismo, a los efectos que aquí interesan (*análisis de las potestades públicas ejercidas por la Administración pública u Órgano administrativo competente*), deben citarse las previsiones de los apartados 1 y 3 del artículo 24 de la Ley -relativo a la “Inspección y Control”-, cuando disponen:

“Artículo 24. Inspección y Control.

1. Al objeto de garantizar lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones que la complementen, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la auditoría, vigilancia, inspección y control de todos los aspectos y estándares administrativos, económicos, procedimentales, técnicos, informáticos, telemáticos y de documentación, relativos al desarrollo de las actividades previstas en esta Ley.

(...)

3. La Comisión Nacional del Juego podrá efectuar un control sobre la cuenta de usuario del participante en las actividades de juego objeto de esta Ley, así como de los operadores o proveedores de servicios de juego. La Comisión Nacional del Juego tendrá acceso a los datos de carácter personal recogidos en la cuenta de usuario de los participantes, respetando en todo momento lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y su normativa de desarrollo.

Las Administraciones Públicas darán acceso a la Comisión Nacional del Juego a sus bases de datos con la finalidad de comprobar la identidad del participante y, especialmente, su condición de mayor de edad.”

Con base en lo dispuesto en una norma con rango de ley formal –Ley 13/2011, de 27 de mayo-, *el juego* se contempla como un hecho complejo frente al que deben combinarse acciones preventivas, de sensibilización, intervención y control, así como de reparación de los efectos negativos.

En este contexto, es al Gobierno de la Nación a quien compete el desarrollo del marco regulatorio legal en lo que respecta a la protección de los

consumidores y, singularmente, la definición de la política de juego responsable o seguro en las dimensiones mencionadas (preventiva, de sensibilización, de intervención y control y reparativa), para su ejercicio por los operadores desde una perspectiva integral de responsabilidad social corporativa.

Asimismo, constituyen una misión esencial del poder público estatal y una derivada inherente al ejercicio de sus potestades públicas, **la regulación, disciplina y control del juego, que, de este modo, se incardina en la base de tratamiento de datos de carácter personal del artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos.**

De tal modo, se advierte que la base legal de licitud para el tratamiento de datos de carácter personal recogido en los artículos 8, 21 y 24 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y, en el desarrollo efectuado por el proyecto de real decreto que se informa, **es el artículo 6.1.e) del RGPD**, lo que es conforme con lo que esta Agencia expuso en su informe **0007/2023**, emitido a consecuencia de la solicitud cursada por la Dirección General de Ordenación del Juego a la Real Federación Española de Fútbol al amparo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

En este sentido, según establece el **artículo 6.1.e) RGPD**, el tratamiento será lícito cuando *“es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”*. Así, en el supuesto que se analiza, en la finalidad perseguida por el tratamiento de datos efectuado por el Órgano administrativo actuante concorre un interés público, consistente en proporcionar a los participantes en las actividades de juego herramientas que posibiliten un mejor control de su nivel de gasto y, por lo tanto, garantizar su adecuada protección en el contexto de la política general de protección al consumidor y a los participantes en actividades de juego (juego responsable), coadyuvando de esta forma a la prevención de aparición de conductas adictivas (de acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, “la tutela y protección social de los menores y de los participantes en los juegos” constituye un “objetivo ineludible”).

Además, según se ha adelantado, **la base legitimadora del artículo 6.1.e) RGPD** encuentra su fundamento en las previsiones del artículo 8 -bajo el cual se ampara la actividad de juego responsable-, del artículo 21 -que establece las funciones de autoridad de regulación del juego-, del artículo 24 -que ampara las funciones de inspección y control de esta-, y del artículo 15 -que establece previsiones específicas sobre los derechos de los participantes en los juegos a los que dota de materialidad el Sistema de Límites Conjunto de Depósitos-.

En resumen, el Sistema de Límites Conjuntos de Depósito es una herramienta que facilita el control de los depósitos que realizan los

participantes en la actividad de juego, y representa una medida que se incardina en el contexto de la política pública de juego seguro o responsable, con la finalidad última de proteger los derechos de estos participantes, coadyuvando igualmente a la prevención de la aparición de conductas adictivas. Desde esta perspectiva tuitiva, la adopción de esta medida contribuye a materializar no sólo las previsiones de los artículos 8, 21 y 24 de la “Ley del Juego”, sino también a dotar de contenido derechos como los previstos en las letras f) y j) de su artículo 15, desde el momento en que esta herramienta permite una mejor gestión de las cantidades que los participantes en el juego estén dispuestos a emplear en esta actividad, incrementando -a su vez- el nivel de información para una práctica responsable del juego.

III

En este contexto, para la determinación del **responsable del tratamiento** de los datos de carácter personal de las personas participantes en actividades de juego *online* de ámbito estatal que tengan abierto un registro de usuario, habrá de estarse a la definición del artículo 4.7 del RGPD, cuando dispone que dicha condición corresponde a *“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; (...)”*, y, en su virtud, determinar con carácter general en quién concurre dicha figura.

Del análisis del texto sometido a informe, se extrae con la debida claridad **la determinación del órgano responsable del tratamiento**. Así, el proyecto de real decreto recoge, en el punto tercero del artículo 36 bis -“Sistema de límites de depósito conjuntos por jugador”-, que *“el sistema de límites de depósito conjuntos será gestionado por la autoridad encargada de la regulación del juego, que tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que se realice.”* (La negrita es nuestra)

Analizada la Disposición adicional décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se concluye que, en la actualidad, **la citada autoridad es la Dirección General del Juego del Ministerio de Consumo (hoy, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030).**

Así, de acuerdo con la citada Disposición adicional décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio:

“La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo asumirá el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego, salvo las relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que se refiere el artículo 49 de dicha ley, que serán ejercidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.”

El real decreto que se informa incorpora una completa regulación de la figura del **responsable del tratamiento**, determinando -en todo caso- que dicha condición concurre en la autoridad encargada de la regulación del juego, y, en concreto, disponiendo en su artículo 36.bis, apartado 3) que:

“3. El sistema de límites de depósito conjuntos será gestionado por **la autoridad encargada de la regulación del juego, que tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos de carácter personal** que se realice. Este sistema tendrá por finalidad dotar a los participantes en las actividades de juego de una herramienta adicional mediante la que mejorar la gestión de su actividad de depósito cuando tengan cuentas abiertas en varios operadores, y promover de esta forma una mejor protección de sus intereses. (la negrita es nuestra)

Las comunicaciones de datos de carácter personal entre los operadores y la autoridad encargada de la regulación del juego, así como los tratamientos de datos de carácter personal que se realicen en el sistema tienen **su base legitimadora en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes públicos**. (la negrita es nuestra)

Queda prohibido el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, los datos genéticos, biométricos y los relativos a la salud, orientación o vida sexual de las personas, así como cualquier otro dato que sea irrelevante o innecesario.

La autoridad encargada de la regulación del juego establecerá los procedimientos adecuados para **mantener la privacidad de los datos de carácter personal de los usuarios de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal**. (la negrita es nuestra)

La autoridad encargada de la regulación del juego únicamente tratará los datos de los participantes que fueran necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de límites de depósito conjuntos por jugador y en concreto los siguientes: **datos relativos a la identidad de los participantes**; datos relativos a la cuenta de juego. Los datos serán cancelados una vez cumplidas las finalidades que justificaron su tratamiento. (la negrita es nuestra)

En todo caso, la autoridad encargada de la regulación del juego **deberá informar a los usuarios acerca de las condiciones del tratamiento de sus datos de carácter personal y de las finalidades para las que se produce el tratamiento, así como los derechos** que les corresponden de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.” (la negrita es nuestra)

Tal y como se adelantó, de acuerdo con el artículo 6.1 del RGPD, para que el tratamiento de los datos de carácter personal de los destinatarios de los tratamientos sea “*lícito*”, resulta necesario establecer las bases jurídicas que amparan dicho tratamiento. Y, según se expuso a este respecto, la base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de carácter personal de las personas afectadas en el supuesto sometido a informe es la prevista en el artículo 6.1.e) RGPD, cuando dispone que “*e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.*”

En este sentido, tanto la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, como la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, atribuyen a la Dirección General del Juego (que sustituye a la extinta Comisión Nacional del Juego) tanto el ejercicio de los poderes públicos como el cumplimiento de las misiones realizadas en interés público de las personas participantes en actividades de juego online de ámbito estatal, llevando a cabo los correspondientes tratamientos de datos de carácter personal que afecten.

Según se indica en la MAIN de la norma que se informa.

“Esta opción centralizada garantiza la existencia de una adecuada coordinación al ser la autoridad reguladora el único de los actores involucrados en el mercado de juego que tiene acceso a la información necesaria para su adecuado funcionamiento. Desde esta perspectiva salva los inconvenientes derivados de la inevitable compartición de información que un sistema de estas características requiere para su adecuado funcionamiento, así como las reticencias y limitaciones legales que pudieran existir caso de no intervenir directamente la autoridad pública responsable de la supervisión. Igualmente, se minimizan las problemáticas derivadas de los posibles tratamientos de datos de carácter personal, ya que será la autoridad reguladora la única que en la gestión y supervisión del funcionamiento del sistema tendrá acceso a los mismos.”

En consecuencia, la Dirección General del Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el ámbito de sus propias competencias, decidirá —a título de responsable de los tratamientos—, sobre los fines y los medios de estos, debiendo garantizar en su actuación el debido cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Según se ha apuntado anteriormente, el proyecto que se informa contiene una completa regulación relativa a la “protección de los datos de carácter personal” de las personas afectadas, sin embargo, en el ámbito de la

concreta especificación de los datos relativos a la identidad de los participantes, adolece de la necesaria concreción, que debe exigirse tanto en razón del principio de seguridad jurídica, cuanto en garantía de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento general de protección de datos (“principios relativos al tratamiento”).

De tal suerte, el tratamiento de los datos por parte del responsable deberá ajustarse a los principios relativos al tratamiento de datos regulados en el citado artículo 5 RGPD, y, muy especialmente, al principio de minimización de datos -ex artículo 5.1.c)-, según el cual los datos personales serán “c) *adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»)*”.

Así, coincidiendo en este punto con las observaciones realizadas por el propio Delegado de Protección de Datos del Ministerio consultante -en su informe de 10 de junio de 2024-, se observa que la mención del artículo 36.bis, apartado 3) a **“datos relativos a la identidad de los participantes”**, sin más especificación, resulta vaga, imprecisa e incompleta.

A este respecto, por parte del órgano consultante **debe incorporarse al artículo 36 bis del proyecto que se informa, el elenco concreto de los “datos relativos a la identidad de los participantes” de los que pretenda hacer uso en el marco de su actividad como responsable**, no bastando -a dichos efectos- la mera mención a la interdicción del tratamiento de cualquier dato *“que sea irrelevante o innecesario”*, tal y como se mantiene en la actual versión del proyecto.

Igualmente, se aconseja la inclusión en el analizado artículo 36 bis, y se propone como sugerencia, un texto normativo del siguiente tenor:

“Todos tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y en el resto de la normativa sobre protección de datos personales”.

IV

Por lo demás, según se advierte, el texto que se informa considera la evolución de las medias de seguridad en materia de protección de datos desde un modelo de lista de cumplimiento a otro de **análisis de riesgo y de impacto en la protección de datos** (responsabilidad proactiva, -ex art. 5.2 RGPD-), quedando dicho enfoque claramente plasmado en el texto que se informa, con estricta observancia de los artículos 24 y 32.1 del RGPD, y en consonancia con las previsiones de su considerando 75.

En este contexto, surge la necesidad de que **las plataformas** utilizadas por el responsable del tratamiento para la correcta gestión del *sistema de límites de depósito conjunto* garanticen adecuadamente el cumplimiento de la normativa de protección de datos, y, en particular, **la completa seguridad del mismo**, en atención al artículo **5.1.f) RGPD**, cuando dispone que los datos serán “f) *tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).*”

Del análisis de la norma sometida a consulta, así como de su MAIN, y de la Evaluación de Impacto presentada por el Órgano consultante, se infiere que el sistema de límites de depósito conjunto que se pretende establecer partirá de unos valores predeterminados establecidos reglamentariamente. Sin embargo, una vez establecidos dichos límites, cada uno de los participantes podrá modificarlos o suprimirlos, si así lo desea, mediante un sistema que pondrá a su disposición la Dirección General de Ordenación del Juego. En definitiva, el sistema que se prevé implementar **es voluntario** en el sentido de que, una vez establecidos los límites conjuntos por el proyecto que ahora se analiza, cualquiera de los participantes registrados podrá decidir hacer con ellos lo que desee -incluso suprimirlos-.

En resumen, a consecuencia de la necesaria seguridad de los tratamientos de datos inherentes al sistema objeto de análisis -**ex artículo 5.1.f) RGPD**-, y, muy especialmente, en atención a la disponibilidad ulterior del participante -que podrá modificar los límites previamente establecidos, e incluso cancelarlos, utilizando para ello una determinada herramienta informática puesta a su disposición-, las plataformas utilizadas por el responsable del tratamiento deberán garantizar adecuadamente el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

En definitiva, si bien el órgano consultante ha considerado que la opción por un sistema centralizado en el que los participantes puedan disponer del sistema de límites de depósito conjuntos de acuerdo con sus características e intereses personales es la opción más óptima -compatible con las finalidades de juego seguro o responsable en las que se incardina esta medida-, dicho sistema plantea cuestiones de seguridad activa a las que deberá darse la debida respuesta desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal de los afectados (a consecuencia de la voluntad de los participantes de modificar y/o suprimir los depósitos previamente establecidos) .

Pues bien, según se observa, en su artículo 36 bis, la norma que se informa incorpora determinadas *previsiones temporales* que, desde la

perspectiva de la protección de datos de carácter personal, carecen de trascendencia, a saber:

“4. El sistema de límites de depósito conjuntos por jugador permitirá a los participantes establecer límites económicos para el conjunto de sus depósitos por importes inferiores a los establecidos con carácter general en el Anexo III. Estas modificaciones de límites deberán ser satisfechas de **forma inmediata por el sistema**.

5. Igualmente, el sistema permitirá que cada participante, de forma expresa, pueda modificar los importes de los límites económicos para el conjunto de sus depósitos, por encima de los establecidos en el Anexo III, o, incluso, la desaparición de cualquier límite económico.

Los nuevos límites, o la desaparición de los mismos, **serán efectivos a los tres días desde que se haya producido la solicitud de modificación de límites**.

6. No podrá solicitarse la supresión o el aumento de los límites establecidos por el participante de conformidad con lo previsto en el apartado 5, **si no han transcurrido tres meses desde el último aumento de dichos límites**.

7. Los participantes en actividades de **juego modificarán los límites conforme a lo previsto en los apartados 4, 5 y 6, a través de la funcionalidad específica** para este propósito con la que contará el sistema de límites de depósito conjuntos por jugador.

(...)”

Sin embargo -ya con absoluta incidencia en materia de protección de datos-, el Órgano consultante, en atención a lo dispuesto en el **apartado a) del artículo 35.3 del Reglamento General de Protección de Datos**, ha realizado -y presentado junto a su solicitud de informe- una **“Evaluación de impacto relativa a la protección de datos” -EIPD-**, al considerar la concurrencia de los presupuestos del citado precepto, cuando señala la procedencia de esta:

“3. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:

a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo similar;

(...)”

En efecto, en el supuesto objeto de análisis, siguiendo lo previsto en el artículo **35.1 RGPD**, resulta *“probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines,*

entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento”, por lo que se estima adecuada la procedencia de dicha evaluación de impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales, tal y como ha determinado el Órgano consultante.

En el supuesto que se analiza, la justificación legal para la realización de una Evaluación de Impacto de Protección de Datos concurre plenamente por cuanto el sistema de depósito conjunto requiere del desarrollo de un sistema de información que permita la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales a gran escala, coincidiendo así -en sus presupuestos y necesidades- con la descripción del tipo legal del artículo **35.3.a) RGPD**.

En su EIPD, el órgano consultante ha procedido al examen completo de las diversas funcionalidades perseguidas por el sistema de límites de depósito conjunto por jugador (y su plataforma de implementación), —con especial mención de las medidas técnicas y organizativas a adoptar— **para evitar el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas**, que han servido para evaluar el impacto del tratamiento. A su vez, se ha asegurado el debido cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 13 del RGPD, garantizando el pleno respeto de los principios de protección de datos del artículo 5 del RGPD, con especial mención del principio de “*limitación de la finalidad*” del tratamiento de su apartado 1.b).

En este sentido, la EIPD aporta la información necesaria para conocer, entre otros aspectos, (i) los referidos a los tratamientos de datos que se efectuarán mediante los nuevos sistemas, (ii) el análisis de la necesidad y proporcionalidad del proyecto con el objetivo de evitar la aplicación desmesurada de una medida que afecte a los derechos y libertades de las personas, y (iii) la superación del juicio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto.

Según se concluye en dicha Evaluación:

“El conocimiento acumulado por la Dirección General de Ordenación del Juego en cuanto a las características del jugador *online*, el estado de la técnica, las oportunidades funcionales que ofrece el sistema de control interno de los operadores, todos estos elementos posibilitan una intervención de tipo prestacional como la que se aborda con el establecimiento de un sistema de límites de depósito conjuntos centralizado, es decir, gestionado por la autoridad reguladora”.

Por lo demás, el examen pormenorizado de la EIPD que se acompaña al dossier documental que conforma la consulta planteada, excedería de los límites de este informe, si bien se aprecia su correcta sistemática y metodología, coherencia y solidez, tanto en sus presupuestos, como en sus conclusiones.

V

En otro orden de cosas, para el establecimiento de la obligación de los participantes en actividades de juego de relacionarse con el Sistema de límites de depósito conjuntos por jugador establecido por la autoridad de regulación del juego, **el apartado CUATRO del proyecto** que se informa, modifica la disposición adicional décima del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, introduciendo un nuevo apartado que establece la obligación de los participantes en actividades de juego de ámbito estatal de relacionarse con la autoridad de regulación del juego para la modificación o cancelación de los límites de depósito conjunto a través del sistema informático que esta autoridad establezca al efecto.

El fundamento jurídico de dicha obligación en lo referido a las relaciones con la autoridad de regulación del juego se encuentra en el **artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cual después de afirmar la facultad que ostentan las personas físicas para elegir si se comunican con las administraciones públicas a través de medios electrónicos o no, dispone en su apartado 3) una excepción en los términos siguientes:

“3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.”

Pues bien, según se expone por el órgano consultante -y se comparte por esta Agencia-, en el caso de las personas participantes en actividades de juego de ámbito estatal desarrolladas a través de páginas web, aplicaciones u otros canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos **concorre la circunstancia de**, atendiendo a la naturaleza de la actividad de juego objeto de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (que es particularmente la que se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos), **ser un colectivo constituido por personas físicas que cuentan con acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios**, puesto que la propia actividad de juego que desarrollan se realiza mediante la utilización de estos medios y, por lo tanto, cuentan con la capacidad técnica necesaria para la interacción con *el sistema*.

De este modo, todas las personas físicas que desean acceder a la oferta *online* de los operadores con título habilitante deben hacerlo mediante **dispositivos electrónicos** a través de los cuales proceden a la apertura de un registro de usuario al que se asocia una cuenta de juego. Esto es, el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, habilita a la Administración a introducir

una obligación de hacer (de actuar, y/o de relacionarse), en el sentido que se dispone, constituyéndose en la habilitación normativa necesaria **para exigir que las relaciones entre los sujetos participantes y la autoridad reguladora del juego se produzcan electrónicamente** (*“vinculación positiva de la Administración a la legalidad: García de Enterría”*).

De acuerdo con lo anterior, el citado **apartado CUARTO** de la norma que se informa dispone lo siguiente:

“Cuatro. Se modifica la Disposición adicional décima, que queda redactada como sigue:

“Disposición adicional décima. Tramitación electrónica.

1. Los procedimientos regulados en este real decreto **podrán ser tramitados a través de medios electrónicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015**, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo. Dichos procedimientos estarán accesibles a los interesados **a través de la sede electrónica de la Autoridad encargada** de la regulación del juego de ámbito estatal. (la negrita es nuestra)

2. En atención a las características y capacidad técnica atribuibles al colectivo de las personas participantes en actividades de juego de ámbito estatal desarrolladas a través de páginas web, aplicaciones u otros canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, y **por aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015** de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, **la interacción de los participantes en actividades de juego con el sistema de límites de depósito conjuntos por jugador previsto en el artículo 36 bis tendrá lugar a través de los medios electrónicos** que a tal fin dispondrá la autoridad encargada de la regulación del juego.” (la negrita es nuestra)

VI

Finalmente, del **resto del articulado** de la norma sometida a informe **no se desprende** que -por el Órgano consultante-, hayan de adoptarse **especiales medidas**, atenciones y/o cautelas, en lo relativo a la protección de los datos de carácter personal de los sujetos afectados. A dichos efectos, baste con reiterar la idoneidad de introducir una cláusula general en el artículo 36 bis, tal y como se sugiere en el **Punto III** del presente informe, de tenor similar a la allí propuesta.

Así, todos los tratamientos de datos personales que pudieren derivar (i)

de la introducción de la figura del representante permanente en España -del apartado UNO del proyecto-, (ii) de la supresión como forma de garantía de la hipoteca constituida sobre inmuebles ubicados en España -del apartado TRES- y (iii) de la actualización de los importes relativos a las garantías con la finalidad de actualizarlos a la inflación acumulada en los últimos años -del apartado CINCO-, deberán realizarse en el marco de las medidas técnicas y organizativas exigidas por el artículo 5 RGPD, y, en concreto:

“Todos tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y en el resto de la normativa sobre protección de datos personales”.